



Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Fiscalía de Cámara CAyT B

**"FEDERACIÓN ARGENTINA DE LESBIANAS Y OTROS  
CONTRA GCBA SOBRE AMPARO -  
IMPUGNACIÓN-INCONSTITUCIONALIDAD"**

**Expediente 133549/2022-0 - Cámara de Apelaciones CAyT Sala II**

**Fiscalía de Cámara CAyT B**

**Dictamen N° 2114-2022**

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de diciembre de 2022

Señores Jueces:

I. Vuelven los autos en vista a esta Fiscalía con motivo de los recursos de apelación deducidos por:

i) la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE; actuación N° 2050909/2022) contra la resolución del 15/07/2022, mediante la cual el tribunal de grado rechazó por extemporánea su solicitud de intervenir en la causa en carácter de *amicus curiae* (actuación N° 1949123/2022);

ii) la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (actuación N° 2552228/2022) contra la resolución del 09/09/2022, en virtud de la que el tribunal de grado dejó sin efecto la actuación N° 2267389/2022 y, en tal sentido, desestimó por extemporánea su presentación a intervenir en calidad de *amicus curiae* (actuación N° 2467595/2022); y

iii) la Fundación Apolo Bases para el Cambio (actuación N° 2584111/2022), las señoras Sandra Pitta y Marina Kienast (actuación N° 2591007/2022), el Partido Demócrata Cristiano (actuación N° 2604561/2022), el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNyA; actuación N° 2632346/2022), la Dra. Úrsula Basset (actuación N° 2636301/2022), el Gobierno de la Ciudad de

Buenos Aires (GCBA, actuación N° 2636984/2022), los señores Mariano Ismael Palamidessi y Florencia Salvarezza —Rector Organizador y docente, respectivamente, de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires (UniCABA)— (actuación N° 2637011/2022), el señor Gustavo Abichacra (actuación N° 2637457/2022), la/os señora/es Marcela V. Voulgaris, Karina M. Catroagudin, Susana B. Cicalone, Rubén O. Diaz y Jérica De Mare (actuación N° 2637462/2022), la/os señora/es Roxana A. Melidoni, Silvia M. Prieto, Vanina M. Casali, Daniela Ayala, Mónica K. Almada y Mario A. Gabach (actuación N° 2637512/2022) contra la resolución del 14/09/2022 que dispuso la conformación y representación de los diversos frentes integrantes de la contienda y terceros interesados (actuación N° 2538843/2022).

II. Con relación a los antecedentes del caso, me remito en lo pertinente al relato efectuado en ocasión de dictaminar en fecha 17/08/2022 en el marco del incidente N° 133549/2022-1 (ver Dictamen N° 1195-2022), donde señalé que los presentes actuados fueron promovidos por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT+) y las señoras María Rachid y Mariana Gras Buscetto a fin de impugnar la legalidad de la Resolución N° 2022-2566-GCABA-MEDGC, en tanto restringe, cercena, y menoscaba el uso del lenguaje inclusivo en todos los establecimientos educativos, públicos y privados, de la Ciudad, tanto en el uso de los documentos oficiales en las escuelas como en los contenidos curriculares que enseñan los docentes.

Es dable destacar además que en virtud de las actuaciones Nros. 1531509/2022; 1548331/2022; 1566947/2022; y 1584864/2022 se dispuso la acumulación sobre estos autos de los expedientes N° 135472/2022-0, caratulado “ *Fierro, María Celeste y otros c/ GCBA s/ amparo* ”; N° 136232/2022-0, caratulado “ *González Velasco, Laura y otros c/ GCBA s/ amparo* ”; N° 137395/2022-0, caratulado “ *Winokur, Federico y otros c/ GCBA s/ amparo* ”; y N° 137695/2022-0, caratulado “ *Gregorini, Mercedes y otros c/ GCBA s/ amparo* ”.

En ese marco y, una vez desplegadas las medidas de difusión

(actuación N° 1470600/2022), se presentaron diversas organizaciones y ciudadanos en las fechas que se detallan a continuación:

- 27/06/2022, el Dr. José Magioncalda —apoderado de la Fundación Apolo Bases para el Cambio—;
- 30/06/2022, las señoras Sandra Pitta y Marina Kienas; y María Alejandra Muchart —Presidenta del Partido Demócrata Cristiano—;
- 01/07/2022, la señora Karina Isabella Leguizamón —Presidenta del CDNNyA—; el Dr. Gustavo Abichacra —médico pediatra y miembro del Consejo Directivo de Disfam Argentina—; la/os señora/es Marcela V. Voulgaris, Karina M. Catroagudin, Susana B. Cicalone, Rubén O. Diaz y Jérica De Mare —directores y maestros de diversas escuelas de la Ciudad—; y la/os señora/es Roxana A. Melidoni, Silvia M. Prieto, Vanina M. Casali, Daniela Ayala, Mónica K. Almada y Mario A. Gabach —directores, vicedirectores y ex directores de otras escuelas de la Ciudad—;
- 07/07/2022, el Dr. Mariano Palamidessi y la Lic. Florencia Salvarezza —Rector Organizador y docente, respectivamente, de la UniCABA—;
- 12/07/2022, la Dra. Ursula Basset —docente universitaria—;
- 13/07/2022, los señores Daniel Adolfo Catalano —en carácter de Secretario General del Consejo Directivo de Capital Federal de ATE— y Agustina Panissa —en calidad de Secretaria General Adjunta de dicha entidad gremial—; y
- 12/08/2022, los Dres. Marisa Graham —Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes— y Juan F. Hernández —Defensor Adjunto de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes—.

Ahora bien, en cuanto a las presentaciones realizadas entre el

30/06/2022 y el 12/07/2022 inclusive, el tribunal de grado dispuso provisoriamente su participación en autos en los términos del artículo 84, inciso 1, del CCAyT y con el alcance dispuesto por el artículo 85, inciso 1, del CCAyT hasta la celebración de la audiencia que había sido convocada anteriormente por el juzgado.

En cambio, con respecto a la solicitud de intervención de ATE, el tribunal de grado resolvió que “ *Toda vez que el plazo de difusión dispuesto mediante el auto del 13 de junio de 2022 (v. act. 1470600/2022) venció el 13 de julio de 2022, a las 11 hs. -de conformidad con lo oportunamente dispuesto el 29 de junio de 2022 (v. act. 1693785/2022), la presentación a despacho resulta extemporánea* ” (actuación N° 1949123/2022).

Dicha decisión fue apelada en subsidio por ATE, agraviándose por cuanto, a su entender, “ *en auto de fecha 13 de junio de 2022 obrante en actuación N° 1470600/2022 V.S. ordena la publicación de los datos de la causa en medios de difusión por el plazo de 10 días hábiles otorgando 10 días hábiles desde la última fecha de publicación para la presentación de terceros con interés en la causa. Dicha publicación se realiza en la página del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en fecha 13.06.2022. Que es menester señalar que entre los 10 días hábiles para la difusión de la causa se encuentran dos días feriados e inhábiles (17/06/2022 Y 20/06/2022), por lo que en fecha 29.06.2022, comenzó a correr el plazo de los 10 días hábiles para realizar presentaciones. En este sentido, dicho plazo arroja que el vencimiento para la presentación de terceros con interés en la causa era en fecha 13.07.2022 (o 14.07.2022 dos primeras)* ” (actuación N° 2050909/2022).

Con fecha 03/08/2022, el tribunal de grado rechazó el recurso de reconsideración interpuesto por ATE, en atención a considerar que “ *teniendo en cuenta los feriados señalados, los diez (10) días de difusión se efectuaron entre el 13 de junio de 2022 y el 28 de junio de 2022, por lo que el plazo para presentarse en autos comenzó a correr el día 29 de junio de 2022. Ello así, vale señalar que un simple cómputo permite advertir que el vencimiento del plazo para que la recurrente intervenga en autos operó el 13 de julio de 2022 a las 11 hs. (cfr. art. 108 del CCAyT)* ”. El 28/09/2022 fue concedida la apelación incoada en subsidio, en atención a lo dispuesto por la Sala interviniente en el incidente N° 133549/2022-1 con remisión a lo dictaminado por este Ministerio Público Fiscal (actuación N° 2561677/2022).

En cuanto a la Defensoría Nacional de los Derechos de las Niñas,

Niños y Adolescentes, si bien inicialmente se tuvo presente su intervención (actuación N° 2267389/2022), ante la oposición formulada por el GCBA, con fecha 09/09/2022 se dejó sin efecto la actuación referida y se desestimó por extemporánea la presentación efectuada (actuación N° 2467595/2022).

El decisorio fue apelado por los Dres. Graham y Hernández, en atención a considerar que el plazo de 10 días establecido por la *a quo* no les resulta aplicable, pues está destinado a quienes pretenden integrar la litis como frente activo o pasivo, mientras que el organismo que ellos representan “ *busca aportar una mirada específica respecto al alcance de los derechos humanos de las niñas y niños* ” a través de la figura de *amigos del tribunal* (actuación N° 2552228/2022).

Finalmente, en lo que aquí importa, el 14/09/2022 el tribunal de grado dispuso “ 1) Tener por integrado al frente actor con la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT+), María Rachid, Mariana Gras Buscetto, María Celeste Fierro, Vanesa Gagliardi, Laura Velasco, la Asociación Civil Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos (ACCADH), Federico Winokur, Inés Zadunaisky, Manuela Castañeira, Viole Alonso, Camile Kirchoff, Mercedes Gregorini, Francisco Quiñones Cuartas, María Bielli y Lune Abril Quiroga. 2) Admitir la intervención de ATTA en los términos del artículo 84.inc.1 –en calidad de litisconsorte del frente actor- y con los alcances y limitaciones establecidas a su actuación en la presente y en virtud de la designación de la representación adecuada del polo activo. 3) Establecer que la representación adecuada del frente activo quedará a cargo de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT+), (...) 4) Rechazar las intervenciones requeridas por Fundación Apolo Bases para el Cambio, Marina Kienast, Sandra Irene Pitta Álvarez, el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del GCBA, Gustavo Abichacra, Mariano Ismael Palamidessi, Florencia Salvarezza, Úrsula Basset, María Alejandra Muchart –presentada por su propio derecho y en su carácter de presidenta del Partido Demócrata Cristiano (Distrito C.A.B.A.) (...) 5) Admitir, en los términos del artículo 84 inc.1 del CCAyT, la participación en autos de Marcela Viviana Voulgaris, Karina Mabel Catroagudin, Susana Beatriz Ciccalone, Rubén Oscar Díaz, Jesica De Mare, Roxana Alejandra Melidoni, Vanina María Casali, Daniela Ayala, Mónica Karina Almada y Mario Antonio Gabach, con los límites establecidos por el artículo 85 y con aquellos que se derivan de su falta de aptitud para ser parte demandada en este juicio . (...) ” (actuación N° 2538843/2022), lo que

motivó la interposición de diversos recursos de apelación.

En primer lugar, se agravio el GCBA, en orden a los siguientes argumentos: i) no se advierte la existencia de un caso, causa o controversia; ii) la FALGBT+ no posee legitimidad para representar a la comunidad educativa local; iii) lo decidido por la jueza de grado vulnera el derecho de igualdad ante la ley pues resolvió en forma amplia al conceder el carácter de parte a los que se presentaron por el frente actor y, en forma restrictiva en relación a aquellos que solicitaron que continúe vigente la Resolución N° 2566/MEDGC/22; iv) corresponde el rechazo de la pretensión por falta de legitimación procesal activa de la legisladora porteña Maria Bielli; v) el amparo no es la vía idónea para cuestionar la legalidad de una norma de carácter general como lo es la Resolución N° 2566/MEDGC/22; vi) la procedencia de la presente acción implicaría invadir la zona de reserva de la Administración, asumiendo el Poder Judicial competencias que no le fueron asignadas.

La Fundación Apolo Bases para el Cambio, a su turno, cuestionó el rechazo a intervenir en el proceso, por los siguientes agravios: i) es falso que el estatuto social de la entidad contiene una limitación en cuanto a la posibilidad de ésta de intervenir en juicio; ii) yerra la jueza de grado al considerar que en su presentación no se han planteado cuestiones técnico-jurídicas adicionales a las ya formuladas por el GCBA; y iii) la defectuosa grabación de la audiencia impide plasmar en autos los fundamentos expuestos en torno a su legitimación.

Las señoras Marina Kienast y Sandra Pitta Alvarez apelaron lo resuelto por la *a quo*, toda vez que, a su entender, las consideraciones expuestas en el decisorio de grado resultan carentes de todo sustento.

El CDNNyA también apeló el pronunciamiento de primera instancia en tanto desestimó la intervención del organismo pues “ *podría llevar a la configuración de contradicciones dentro de la propia Administración* ”. Al respecto, sostuvo el recurrente que lo así resuelto vislumbra un desconocimiento de la letra clara de la Ley 114, la cual establece la autonomía técnica y administrativa y la autarquía financiera del Consejo (cfr. artículo 46 de la ley). Agregó, por otro lado, que la

legitimación de la señora Presidenta, para intervenir en nombre del Consejo surge del Decreto N° 192/2021 donde se la designa como máxima autoridad de dicha entidad.

El Dr. Abichacra cuestionó la denegatoria a intervenir en autos, en virtud de que no se reconoce su carácter de habitante de la Ciudad, lo que —según alega— resulta no sólo arbitrario sino además discriminatorio y contrario al principio de igualdad.

Sobre la base de similares argumentos se agraviaron los señores Palamidessi y Salvarezza.

Por su parte, la Dra. Basset recurrió la decisión del tribunal de grado, arguyendo sustancialmente que “ *los conceptos que acompañamos en nuestra presentación no resultan de ninguna otra, y tutela bienes jurídicos (los derechos de las mujeres en la sociedad) que no son investidos por ninguna otra presentación* ”.

Planteó además que “ *la Jueza admitió la representación de la legitimación activa haciendo una interpretación en sentido amplio, mientras que [para] excluir la legitimación pasiva utilizó un criterio restrictivo y estricto* ”.

El Partido Demócrata Cristiano apeló el rechazo a su participación en el proceso de acuerdo a los siguientes agravios: i) la intolerancia al uso correcto del lenguaje que pretende imponer el frente actor no fomenta la pluralidad, que es lo que se intenta defender desde el Partido; y ii) la resolución en crisis afecta su derecho a reivindicar su plataforma electoral, sus principios partidarios y la doctrina permanente que sostiene.

Finalmente, las/los docentes Roxana Melidoni, Silvia Prieto, Vanina Casali, Daniela Ayala, Mónica Almada y Mario Gabach, por un lado, y Marcela Voulgaris, Karina Catroagudin, Susana Ciccalone, Rubén Díaz y Jérica De Mare, por el otro, se quejaron por la calidad de terceros interesados que les fue asignada por el tribunal de primera instancia, cuando —a su entender— deben ser reconocidos como parte del proceso. Ello así, toda vez que, según argumentaron en ambos casos: i) el rol que detentan como docentes y directivos los habilita para poner en consideración la visión de quienes se desempeñan en las escuelas y conocen el proceso educativo por el que atraviesan los estudiantes; ii) el interés que representan se basa en el diálogo directo

en el aula con los/as alumnos/as, más aún, teniendo en cuenta a todos/as aquellos/as que cuentan con algún trastorno de aprendizaje o dificultad.

III. Así encuadrada la cuestión sometida a estudio, estimo necesario realizar las siguientes consideraciones:

A. Previo a todo, recuerdo que, como se ha señalado en numerosas oportunidades, los jueces no están obligados a pronunciarse sobre todos los argumentos esgrimidos por las partes, ni hacer referencia a la totalidad de la prueba producida, sino que alcanza con que valoren lo que sea conducente para la correcta composición del litigio y que baste para dar sustento a un pronunciamiento válido (CSJN, *Fallos* 258:304, entre muchos otros; y artículo 310 del CCAyT).

B. Sentado lo anterior y por razones de orden metodológico, cabe analizar en primer lugar las defensas del GCBA en torno a la inexistencia de un caso judicial, la inadmisibilidad de la vía de amparo y la falta de legitimación del frente actor, dado que la necesidad de tratar los restantes recursos dependerá de lo que se decida a este respecto.

B.1. Ello así, vale recordar que la acción de amparo dirigida a la protección de derechos o intereses de incidencia colectiva se encuentra prevista en los artículos 43 de la Constitución Nacional y 14 de la Constitución de la Ciudad (CCABA). Ésta última norma dispone, en lo que aquí interesa, que “ [ e ] stán legitimados para interponerla cualquier habitante y las personas jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos, cuando la acción se ejerza contra alguna forma de discriminación, o en los casos en que se vean afectados derechos o intereses colectivos, como la protección del ambiente ” .

Toda vez que la acción de amparo constituye una garantía constitucional otorgada para tutelar de manera rápida y eficaz los derechos, su procedencia formal debe ser analizada con criterio amplio (cf. artículo 14 de la Constitución local). En efecto, tal como lo viene sosteniendo reiteradamente la jurisprudencia, si bien la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta a que alude el texto constitucional requiere que la lesión de los derechos o garantías



reconocidos resulte del acto u omisión de la autoridad pública en forma clara e inequívoca, sin necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos, o de amplio debate y prueba, no puede calificarse al amparo como una acción de tipo excepcional. Por el contrario, toda vez que ésta constituye una garantía constitucional para tutelar de modo rápido y eficaz los derechos y las garantías establecidas para protegerlos, la procedencia debe ser analizada con criterio razonablemente amplio, resultando admisible siempre que el acto u omisión impugnada reúna las condiciones y efectos que prevén los textos constitucionales (CSJN, *Fallos* : 306:1253, 307:747, entre otros).

Según lo ha puesto de relieve el Máximo Tribunal, “ [ s ] iempre que aparezca de manera clara y manifiesta la ilegitimidad de una restricción cualquiera a alguno de los derechos esenciales de las personas, así como el daño grave e irreparable que causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos administrativos o judiciales, corresponderá que los jueces restablezcan de inmediato el derecho restringido por la vía rápida del amparo ” ( *Fallos* 241:291; 280:228).

Concordantemente, el artículo 2 de la Ley N° 2.145 regula específicamente la procedencia formal de la acción de amparo y prescribe que la misma es “ [ e ] xpedita, rápida y gratuita y procede, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o particulares, que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes de la Nación, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en los que la ciudad sea parte ”. Del texto transcrito puede apreciarse con claridad que la norma citada replica los preceptos constitucionales precitados.

En línea con lo anterior, el artículo 7° de la norma requiere que en caso de amparos colectivos, se identifique al grupo o colectivo afectado.

De lo antes expuesto debe concluirse que la idoneidad de la vía no puede predicarse en abstracto, sino que es menester focalizarse en la naturaleza de los derechos en juego y en la calidad de los sujetos

intervinientes en cada caso concreto a fin de alcanzar la genuina protección del derecho involucrado y la eficacia de la decisión jurisdiccional.

B.2. En este orden de ideas, advierto que los actores han intentado la vía de la acción de amparo prevista en el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad, fundando su legitimación activa en la afectación de derechos de incidencia colectiva, de acuerdo con los términos delineados por la Corte Suprema en el precedente “ *Halabi, Ernesto c/PEN –ley 25873– dto. 1563/04 s/amparo* ”, del sentencia del 24/02/2009 (CSJN, *Fallos* 332:111), donde el Alto Tribunal delineó tres categorías de derechos: i) derechos individuales, ii) derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, y iii) derechos de incidencia colectiva referidos a intereses individuales homogéneos. En cuanto a este último tipo de derechos, se establecieron cuáles son los recaudos elementales que hacen a la viabilidad de las acciones colectivas que se promuevan en su defensa: i) precisa identificación del grupo o colectivo afectado; ii) idoneidad de quien pretenda asumir su representación; y iii) existencia de un planteo que involucre, por sobre aspectos individuales, cuestiones de hecho y de derecho que sean comunes y homogéneas a todo el colectivo.

Ahora bien, sin importar el supuesto del que se trate, es ineludible la comprobación de la existencia de un “caso” (artículo 116 de la Constitución Nacional, y Fallos 310:2342, 311:2580 y 326:3007, entre muchos otros); ello, sin perjuicio de que el “caso” posee “ (...) *una configuración típica diferente en cada uno de los supuestos, lo que resulta esencial para decidir sobre la procedencia formal de las pretensiones* ” (CSJN, *Fallos* 338:1492).

La necesidad de demostrar la existencia de un caso radica en que “ [ *e* ] *l control encomendado a la justicia sobre las actividades ejecutiva y legislativa requiere que el requisito de la existencia de un ‘caso’ sea observado rigurosamente, no para eludir cuestiones de repercusión pública sino para la trascendente preservación del principio de división de poderes, al excluir al Poder Judicial de una atribución que, como la de expedirse en forma general sobre la constitucionalidad de las normas emitidas por los otros departamentos del gobierno, no le ha sido reconocida por el art. 116 de la*

B.3. A partir de estas premisas, es menester analizar si el frente actor ha traído a conocimiento de los jueces un verdadero caso, causa o controversia destinado a prevenir la causación de daños en situaciones jurídicas concretas, o si en cambio, su petición se enmarca en cuestionamientos generales en torno a la constitucionalidad de la normativa cuestionada.

Al respecto, cabe destacar que el objeto de la demanda promovida está dirigida esencialmente a lograr la tutela de los derechos a la igualdad, a la no discriminación y a la libertad de expresión de quienes integran la comunidad educativa ante el dictado de la Resolución N° 2022-2566-GCABA-MEDGC, que presuntamente restringe, cercena y menoscaba el uso del lenguaje inclusivo en los establecimientos educativos de la Ciudad, públicos y privados, en sus tres niveles de enseñanza, tanto en el uso de los documentos oficiales en las escuelas como en los contenidos curriculares que imparten los docentes en las aulas.

Llegado a este punto, y en línea con los razonamientos vertidos por mi colega ante la instancia de grado a cargo de la Unidad Especializada en Litigios Complejos de este Ministerio Público Fiscal (ver Dictamen FCAYT N° 115-2022), advierto que en el caso se hallarían reunidos los recaudos formales que justifican la promoción de un amparo colectivo, puesto que existe una causa común - la vigencia de la resolución 2566/GCABA-MEDGC/2022- que a criterio de los actores, causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales (igualdad, identidad, expresión del género, libre expresión, etc.) y paralelamente, estaría generando discriminación -desde el Estado- respecto de las personas no binarias; grupo este respecto al cual, además, existiría un fuerte interés estatal en proteger.

Otra razón que conduce a confirmar el trámite colectivo dado al proceso y, consecuentemente, a desestimar los argumentos expresados por el GCBA en su memorial en este punto, reside en la conveniencia de que lo que aquí se decide tenga efectos expansivos con alcance de cosa juzgada con relación a todo el colectivo involucrado. Esto último,

por otra parte, no podría ser de otro modo, dadas las características y el ámbito de aplicación de la norma impugnada que no hacen posible fraccionar la condena con alcances individuales.

En síntesis, a criterio de este Equipo Fiscal todas estas particularidades permiten sostener la decisión de la magistrada de grado en tanto dió curso a la acción por entender que por su intermedio se busca prevenir una afectación a un derecho de incidencia colectiva, con la consiguiente ampliación de la legitimación para los promotores de la causa.

B.4. El GCBA también cuestiona la decisión adoptada en la instancia de grado en cuanto encontró legitimada a la FALGBT+ para promover el presente amparo colectivo.

En tal sentido, aduce el recurrente en su presentación que, de los propios términos estatutarios, surge que la FALGBT+ no posee legitimación para representar a la comunidad educativa.

Sobre este punto noto que, tal cual se pone de manifiesto en el dictamen emitido por la Unidad Especializada en Litigios Complejos de este Ministerio Público Fiscal, del Estatuto social de la FALGBT+ surge que su objeto se centra, entre otros propósitos, en: “ a) *Promover la aceptación de la diversidad y el respeto a ser diferente y luchar contra todo tipo de discriminaciones que tiendan a la segregación o menoscabo de algún derecho (salud, educación, trabajo, etc.) por razones o pretexto de orientación sexual, identidad de género y/o sexo, raza etnia, edad, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que implique una distinción, exclusión, restricción o menoscabo; b) Trabajar por el acceso de la comunidad LGBT a todos los derechos humanos y civiles que le correspondan (...)* ” (ver artículo 2° del acta constitutiva de la FALGBT+).

Teniendo ello en cuenta, e independientemente de que la entidad carezca de legitimación para representar a la comunidad educativa como le enrostra el GCBA, evidentemente la entidad actora posee legitimación para representar a la comunidad LGTB+ que se siente amenazada por la regulación impugnada. Desde esta perspectiva, creo

que es factible afirmar que la Federación actora puede quedar alcanzada por la previsión contenida en el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad en cuanto legitima en materia de amparo colectivo a “ *las personas jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos, cuando la acción se ejerza contra alguna forma de discriminación, o en los casos en que se vean afectados derechos o intereses colectivos* ”. En esta dirección, es un hecho público y notorio la larga trayectoria desplegada por la institución en defensa del colectivo que representa en todos los ámbitos de la sociedad, todo lo cual le da plausibilidad a su legitimación para accionar en el caso, principalmente en el estadio incipiente de estudio en el que este se encuentra y donde nada corresponde decidir acerca de su admisibilidad sustantiva.

C. Despejados los óbices que tienen que ver con la procedencia de la acción, corresponde atender seguidamente a los cuestionamientos incoados por los demás recurrentes.

#### C.1. Resolución del 15/07/2022 (actuación N° 1949123/2022)

En primer término, vale referirse al recurso de apelación deducido en subsidio por ATE contra la denegatoria dispuesta por el tribunal de grado a la solicitud de intervenir “ *como Amigos del Tribunal, en apoyo de la parte actora* ” en razón de haber considerado la *a quo* que la presentación formulada por la entidad gremial el 13/07/2022 a las 19:12hs. resultó extemporánea.

Alega el recurrente que, en tanto el 13/06/2022 se procedió a difundir por el plazo de 10 (diez) días hábiles los datos del expediente en la página del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la fecha a partir de la cual comenzó a correr el término de 10 (diez) días hábiles para presentarse en autos fue el 29/06/2022 y, por consiguiente, el vencimiento para la presentación de terceros acaeció el 13/07/2022 o, en su defecto, durante las dos primeras horas del 14/07/2022.

De lo anterior se desprende que no existe controversia en cuanto a la fecha a partir de la que se hizo pública la existencia de estos actuados, esto es, el 13/06/2022 —cfr. sitio web de información judicial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad:

ni sobre la que comenzaron a contabilizarse los 10 (diez) días hábiles para presentarse en la causa, es decir, el 29/06/2022. En cambio, el planteo reside en el cómputo de aquellos 10 (diez) días y la fecha en la que, en consecuencia, expiró el término concedido por el tribunal.

Sentado ello, noto que es el apelante quien ha incurrido en error al contar los plazos judiciales. En efecto, tal cual lo destaca la jueza de grado en oportunidad de resolver el recurso de reconsideración, “ (...) *los diez (10) días de difusión se efectuaron entre el 13 de junio de 2022 y el 28 de junio de 2022, por lo que el plazo para presentarse en autos comenzó a correr el día 29 de junio de 2022. Ello así, vale señalar que un simple cómputo permite advertir que el vencimiento del plazo para que la recurrente intervenga en autos operó el 13 de julio de 2022 a las 11 hs. (cfr. art. 108 del CCAyT)* ”, sin que el recurrente haya invocado causal alguna capaz de modificar la forma de contabilizar el lapso fijado por la *a quo*, que además, fue aplicado con relación a otros presentantes - v.gr., actuaciones 1948581/2022 y 1948827/2022- y advertido por medio de la providencia del 29/06/2022 ( actuación 1693785/2022).

En virtud de lo anterior, opino que correspondería desestimar la apelación incoada por ATE contra lo resuelto en la instancia de grado mediante la actuación N° 1949123/2022.

D. Resolución del 09/09/2022 (actuación N° 2467595/2022)

D.1. Por otro lado, noto que la Dra. Marisa Graham, en su carácter de Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y el Dr. Juan Facundo Hernandez, en su calidad de Defensor Adjunto de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, apelan la decisión del tribunal de grado de rechazar por extemporánea su presentación, pues entienden que “ *limita irrazonablemente la posibilidad de participar, en calidad de amicus curiae, a esta Defensoría de Derechos de NNYA en tanto organismo público. Así limita el ejercicio efectivo del mandato legal previsto en la ley 26.061 que crea en su*

*artículo 47 la figura de la Defensoría la cual tiene entre sus misiones ‘velar por la protección y promoción de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución Nacional, y las Leyes Nacionales’.*

D.2. Ahora bien, sin perjuicio de la misión, las funciones y los deberes que la Ley nacional N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes le confiere a la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (cfr. artículos 47, 55 y 64 de la norma), las razones que llevaron al tribunal de grado a rechazar su participación radican exclusivamente en la temporalidad del plazo para presentarse, cuyo vencimiento no es negado por el recurrente. Es decir que lejos de desconocer los cometidos institucionales del organismo al que pertenecen los presentantes, la cuestión referida a su posible participación en el pleito fue decidida en base a cuestiones estrictamente procesales. Nótese, en este orden de ideas, que otros interesados en ser considerados *amicus curie* se presentaron dentro del plazo fijado por el tribunal (v.gr., el INADI -actuación 1800451/2022-; el decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA - act 1974903/2022-; la presidenta de la Academia Nacional de Educación - act. 1909190/2022).

Ello así, por las mismas razones expuestas en el acápite anterior y a fin de aplicar un criterio unívoco para la totalidad de los presentantes, entiendo que correspondería el rechazo de los recursos estudiados en el este acápite.

E. Resolución del 14/09/2022 (actuación N° 2538843/2022)

La resolución de referencia, como ya dije, dispuso la conformación y representación de los diversos frentes integrantes de la contienda y terceros interesados, lo que motivó la interposición de diversos recursos de apelación que serán abordados separada y sucesivamente.

No obstante, previo adentrarse en el tratamiento de tales recursos, es dable señalar que de acuerdo lo prevé el artículo 84 del CCAyT, “[ p]

*uede intervenir en un juicio pendiente en calidad de parte, cualquiera fuere la etapa o la instancia en que éste se encontrare, quien: 1. acredite sumariamente que la sentencia*

*puede afectar su interés propio. 2. Según las normas del derecho sustancial, hubiese estado legitimado para demandar o ser demandado en el juicio ”.*

A continuación, el artículo 85 del mentado cuerpo normativo estipula que “ [ e ] n el caso del inc. 1º del artículo anterior, la actuación del/la interviniente es accesoria y subordinada a la de la parte a quien apoyare, no pudiendo alegar ni probar lo que estuviere prohibido a ésta. En el caso del inc. 2º del mismo artículo, el/la interviniente actúa como litisconsorte de la parte principal y tiene sus mismas facultades procesales ”.

En otras palabras, mientras la intervención voluntaria de terceros a la que alude el primer inciso del artículo 84 del Código de rito, también llamada intervención adhesiva simple, refiere a quien, sin estar legitimado para demandar o ser demandado, defiende un derecho ajeno pero en un interés que le es propio —es decir, que aporta a sostener la postura de alguna de las partes— (cfr. Fassi, Santiago, Yáñez, César, *Código Procesal Civil y Comercial de la Nación*, Tomo I, Astrea, Buenos Aires, 1998, p. 514), la contemplada en el segundo supuesto del aludido dispositivo legal, también llamada intervención principal, se configura cuando se interviene en un proceso ajeno para hacer valer un derecho en igualdad de condiciones que los de las partes principales (conf. Balbín Carlos (dir.), *Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires*, Tomo I, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2010, p. 251).

En el caso, debido a que el objeto del pleito consiste en lograr la inconstitucionalidad de una resolución dictada por el Ministerio de Educación del GCBA, sólo este último detenta, en sentido estricto, la calidad de parte demandada. En esta dirección, la Dra. Tessone ha resuelto acertadamente que las personas presentadas en apoyo de la posición el GCBA no cuentan con legitimación para ser demandadas, por lo que su potencial participación en el pleito sólo podría darse en los términos del inciso 1º del art. 84 del CCAyT.

Por último, cabe destacar que la intervención de terceros es de carácter restrictivo y sólo debería admitirse en circunstancias excepcionales, esto es, cuando realmente exista un interés jurídico que proteger y la intervención de aquél fuera la única vía para hacerlo (conf. CSJN:



*Fallos* : 327:1020. Ver en igual sentido, Palacio Lino, *Derecho Procesal Civil*, Tomo III, Abeledo Perrot, Buenos Aires, p. 229). Acentúa este carácter restrictivo la circunstancia puntualizada acertadamente por mi colega del Ministerio Público en la instancia de grado en el Dictamen 158/2022, puesto que al tratarse de un litigio colectivo cuya sentencia poseerá efectos expansivos inclusive con relación a quienes no se han presentado en el proceso, sólo sería pertinente la intervención de quienes desean participar como terceros si lo hacen a los fines de proteger un interés jurídico propio determinado y diferenciado. Sólo esta mirada permite conciliar el interés del tercero con la debida gestión o gerenciamiento procesal del caso colectivo.

Conforme a estas premisas serán analizados los distintos recursos planteados por quienes cuestionan la decisión de grado que vetó su participación en el proceso o la admitió pero en términos diversos a los pretendidos.

E.1. La Fundación Apolo Bases para el Cambio “ *requiere intervención en estas actuaciones (...) para realizar aportes desde perspectivas no contenidas en el escrito inicial, solicitando se rechace la demanda de amparo* ” (actuación N° 1642776/2022). Aclara que “ *se encuentra plenamente legitimada en tanto que su presentación tiende a proteger el derecho a la educación y a la libertad de los niños* ” (actuación N° 1842564/2022).

El tribunal de grado se pronuncia por la inadmisibilidad de la intervención requerida, toda vez que resulta “ *una actuación ajena a la voluntad societaria* ” y que no se han “ *brindado argumentos jurídicamente diferenciales ni de mayor relevancia a los proporcionados por la propia Administración demandada que justifiquen, den lugar a o constituyan una actuación coadyuvante* ”.

Se agravia al respecto la Fundación, arguyendo que: i) la enumeración del estatuto social es meramente ejemplificativa y por ello no excluye la posibilidad de intervenir como parte en un juicio; y ii) la jueza de grado ha omitido considerar que, al margen de las cuestiones técnico-jurídicas vertidas por el GCBA, se ha argumentado acerca del carácter proselitista del lenguaje inclusivo y la afectación que el uso de una lengua no oficial produce en el sistema republicano.

Sentado lo anterior, observo que del estatuto social acompañado por la

Fundación se desprende que aquella tiene por objeto “ *velar por el cumplimiento, promoción y protección integral de los principios republicanos y el respeto por las instituciones, asegurando y promoviendo el cumplimiento de las normas que rigen la vida en sociedad, a nivel local, provincial y nacional e internacional* ”, para el cumplimiento de lo cual puede “ *(viii) Tener una participación activa en las causas judiciales donde se encuentren vulnerados los valores e instituciones republicanos, mediante el asesoramiento, patrocinio y/o presentación en calidad de amicus curiae* ” (ver escritura N° 215 del 04/10/2018 pasada al folio 690 del registro notarial 1052 a cargo de la escribana Valeria Schvartzman).

Bajo estos términos, observo que los fundamentos expuestos por la apelante en el memorial en torno a la legitimación procesal de la Fundación no rebaten eficazmente los argumentos brindados por la magistrada de grado para decidir del modo en que lo hizo con base en el examen del estatuto de la propia Fundación y de la expresa mención que allí se hace en cuanto a la posibilidad de participar en calidad de asesora, patrocinante o *amicus curiae*. Así también lo ha entendido la Sala II del fuero en los autos “ *Fundación Apolo Bases para el cambio y otros c/ GCBA s/ incidente de apelación - amparo - impugnación - inconstitucionalidad* ” (expediente N° 85669/2021-1, sentencia del 29/04/2021).

Independientemente de lo anterior, no advierto que la Fundación haya logrado rebatir lo postulado en la sentencia recurrida en cuanto a que, en rigor de verdad, no ha aportado argumentos jurídicamente diferenciales ni de mayor relevancia a los proporcionados por la propia Administración demandada para defender la legitimidad de la decisión impugnada.

En efecto, la actora discurre acerca del modo en que la procedencia de la acción afectaría el sistema republicano de gobierno por cuya defensa aboga la asociación recurrente. Sin embargo, tal cual lo ha ponderado la jueza de grado, no llega a advertirse con relación a este propósito una significativa diferencia con la línea argumental que encarna el GCBA como parte demandada, siendo que lo crucial, para ser admitido en el proceso como coadyuvante de la parte actora o la

demandada es, además de defender un interés propio, aportar argumentos distintos a los que ya han sido planteados por las partes principales que puedan enriquecer el debate que tiene lugar en el seno de una acción colectiva como de la que se trata.

Siendo el GCBA una persona pública regida por el principio de legalidad, es elemental que toda sus acciones (actos administrativos, reglamentos, actuaciones materiales, etc.) deben ajustarse y respetar el sistema republicano de gobierno por lo que no puede sostenerse, a partir de aquí, una línea argumental diferente de la que va a sostener la propia parte demandada.

Por todo lo expuesto, opino que la apelación intentada no debería prosperar (cfr. artículos 236 y 237 del CCAyT).

E.2. A su turno, las Dras. Marina Kienast y Sandra Pitta solicitan intervenir en estas actuaciones, a fin de realizar aportes desde perspectivas no contenidas en el escrito inicial, solicitando el rechazo de la demanda (actuación N° 1700613/2022). Mientras la primera de las nombradas se presenta como Diputada de la Legislatura porteña e integrante de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, la segunda lo hace como investigadora del CONICET y Coordinadora de Trayecto en la UniCABA, lo que —según especifica— implica la coordinación de grupos docentes y el seguimiento de estudiantes de carreras relacionadas con la docencia (actuación N° 1840977/2022).

La magistrada de grado rechaza la intervención requerida por las mencionadas, considerando en cuanto a la Dra. Pitta que toda vez que “ *la resolución en crisis no se encuentra dirigida a ser aplicada en el ámbito de la enseñanza superior ni universitaria, no se advierte que se halle en posición de invocar un interés propio que [la] invista de título suficiente para ser admitid [a] en el marco del presente proceso* ”.

Se agravia al respecto la legisladora Kienast en tanto se rechazó su legitimación para intervenir en autos sin haberse expuesto un solo argumento sobre el particular. La investigadora Pitta apela, en cambio, que se haya soslayado su pertenencia a una institución universitaria donde se dictan carreras vinculadas a la docencia.

Ahora bien, con relación al cuestionamiento de la Dra. Kienast, opino

que, si bien le asiste razón a la apelante en torno a la ausencia de fundamentos para desestimar su presentación en la causa, no menos cierto es que la sola invocación de su carácter de parlamentaria, involucrada en temas de educación, no reviste entidad suficiente para tenerla como parte interesada en apoyo de la posición del GCBA.

En cuanto al planteo de la Dra. Pitta noto que se limita a reivindicar su pertenencia a la UniCABA y el dictado de los profesorados que componen la oferta educativa, lo cual *per se*, no alcanza para demostrar que cuentan con un interés diferenciado y propio que les permita participar en el proceso en los términos del art. 84 del CCAyT. Es decir, con independencia de que la resolución cuestionada pueda por vía indirecta extender sus alcances a la educación universitaria lo cierto es que las actoras no pueden demostrar un interés distinto al del GCBA - que obviamente litiga en defensa de la legalidad de la norma que ha dictado - ni menos todavía pueden pretender adjudicarse una representación de los niños, niñas y adolescentes por la sola invocación del art. 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y de las normas de rango legal nacionales y locales tuteladores de aquellos.

E.3. En cuanto a la apelación del Partido Demócrata Cristiano, Distrito CABA, advierto que sus agravios no constituyen una crítica concreta y razonada del decisorio de grado (artículos 236 y 237 del CCAyT).

Ello así, toda vez que los argumentos vertidos en el memorial no alcanzan a rebatir adecuadamente las consideraciones tenidas en cuenta por el tribunal de grado en orden a la participación que perseguía el Partido en las presentes actuaciones y, se limitan, en cambio, a resaltar las virtudes del uso correcto del lenguaje, cuyo tratamiento será materia de la resolución de fondo.

Por otro lado, huelga destacar que, sin perjuicio de los valores y principios que pueden guiar el accionar de la agrupación política, ello no los legitima a arrogarse la representación legal de los derechos de incidencia colectiva de los niños, niñas y adolescentes involucrados en autos, pues es la propia ley la que concede la representación necesaria

de aquellos a sus progenitores y, de manera complementaria, al Ministerio Público Tutelar (artículos 100 y 103 del Código Civil y Comercial de la Nación).

En virtud de lo expuesto, opino que correspondería declarar la deserción del presente recurso.

E.4. El CDNNyA, por su parte, ve denegada su actuación en la causa al considerar la jueza de grado que resulta improcedente su intervención en forma independiente a la del GCBA.

Como indiqué más arriba, se agravia el organismo de lo así resuelto pues, a su entender, ello refleja un desconocimiento de la letra de la Ley 114, que le otorga autonomía técnica y administrativa y autarquía financiera (cfr. artículo 46 de la ley). Asimismo, sostuvo que la legitimación de la señora Presidenta, para intervenir en nombre del CDNNyA, surge del Decreto N° 192/2021, que la designa como su máxima autoridad.

Así las cosas, vale recordar que la Ley 114, que tiene por objeto la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, crea el CDNNyA en el ámbito de la Ciudad “ *como organismo especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad en materia de promoción y protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes* ” (artículo 45).

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 46 de la norma, el CDNNyA integra el área Jefatura de Gobierno de la Ciudad y goza de autonomía técnica y administrativa y autarquía financiera.

Entre sus funciones, se encuentran las de: “ a) *definir la política anual del organismo a través de un Plan que articule transversalmente la acción de gobierno en todas las áreas y enunciar los criterios para la formulación estratégica de la misma;* b) *diseñar y aprobar los programas necesarios para el cumplimiento de los derechos consagrados y ratificados por la presente ley;* c) *asesorar y proponer al Gobierno de la Ciudad las políticas del área;* d) *articular las políticas públicas de todas las áreas de gobierno, en los aspectos vinculados con la infancia y la adolescencia;* e) *elaborar proyectos legislativos específicos;* (...) i) *tomar las medidas para dar cumplimiento a las demandas pertinentes;* (...) l) *realizar estudios, relevamientos, diagnósticos situacionales, investigaciones y recabar información de cualquier organismo público o privado;* (...) q) *recabar, recibir y canalizar las inquietudes de niños, niñas y*

*adolescentes (...)*” (artículo 54).

Finalmente, en lo que aquí importa, se atribuye al Presidente del CDNNyA el ejercicio de la legitimación procesal para actuar en todos los casos derivados de los fines y objetivos de la presente ley (artículo 55).

La circunstancia que contempla el art. 46 de la ley 114, en cuanto a que el ente integra el área de Jefatura de Gobierno de la Ciudad no impide visualizar, a mi criterio, la existencia de un interés específico a tenor de su particular rol de garante de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y como máxima autoridad especializada en temas de infancia dentro de la Ciudad, calidad esta que justifica, a mi criterio, la posibilidad de intervenir en los términos del inciso 1º del artículo 84 del CCAyT.

E.5. Respecto a las apelaciones deducidas por el Doctor en Educación Mariano Ismael Palamidessi, Rector Organizador de la UniCABA, la Licenciada Florencia Salvarezza, docente de dicha universidad, el médico pediatra Gustavo Abichacra, integrante de la Asociación DISCAFAM Argentina, y la Doctora Ursula Basset, docente universitaria e investigadora especializada en “ *Discriminación y violencia simbólica y estructural contra la mujer*”, observo que el rechazo a participar en autos se fundó sustancialmente en que no lograron acreditar un interés propio que los invistiera de título suficiente para ser admitidos en el marco del presente proceso.

A su vez, noto que los agravios esgrimidos por los recurrentes en su memorial se sustentan en la presunta arbitrariedad del pronunciamiento apelado y la consecuente afectación al derecho de participar, actuar y ser oído en juicio.

Al respecto, en primer lugar cabe señalar que es opinión de este Equipo Fiscal que frente a la ausencia de una normativa regulatoria general del trámite de los procesos colectivos y dado el elevado nivel de complejidad que presenta esta causa en cuanto al número de presentantes y el debate público existente con relación a la temática concernida, el criterio del magistrado interviniente para ordenar el trámite del proceso merece máxima deferencia, salvo, claro está,

ilegitimidad o manifiesta irrazonabilidad.

Dicho ello, noto que la Dra. Tesone ha sustentado con solvencia las razones por las cuales consideró que los nombrados no estarían en condiciones de ser considerados partes coadyuvantes de la demandada. Dado que los recurrentes en sus agravios reiteran en gran medida planteos que ya fueron examinados y desestimados, ello, en principio impondría su rechazo (conf. art. 237 CCAyT).

No obstante, dada la sobrada trayectoria profesional y el avezado conocimiento que ostentan los nombrados profesionales en las distintas cuestiones que se debaten en autos, entiendo que el Tribunal, en el marco del art. 248 del CCAyT, eventualmente podría evaluar la participación de aquellos en términos distintos a los pretendidos, esto es, en calidad de *amicus curiae*, tal como fue dispuesto, por ejemplo, con relación a la interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y la Presidenta de la Academia Nacional de Educación.

Es que como acertadamente lo ha señalado mi colega del Ministerio Público Fiscal ante la instancia de grado al dictaminar sobre los presentantes designados como *amicus curiae* (Dictamen N° 158-2022 del 19/08/2022), la intervención de estas personalidades bajo la figura de “amigos del tribunal” “*podría acarrear importantes ventajas, tales como, el fortalecimiento de la transparencia, la ampliación del debate y elevación del nivel de discusión al incorporar argumentos que tal vez no hubieran sido objeto de consideración por el tribunal, así como la habilitación de espacios de participación que traen aparejado mayor legitimidad en las decisiones judiciales*”.

E.6. Por último, la/os docentes Marcela V. Voulgaris, Karina M. Catroagudin, Susana B. Ciccalone, Rubén O. Diaz, Jérica De Mare, Roxana A. Melidoni, Silvia M. Prieto, Vanina M. Casali, Daniela Ayala, Mónica K. Almada y Mario A. Gabach pretenden que se revoque la resolución dictada por la jueza de grado en fecha 14/09/2022, en tanto admite su participación en el pleito como “*terceros litisconsortes pasivos, encontrándose subordinada su intervención al accionar del GCBA demandado*”, y que se los reconozca, en cambio, “*como parte del*

*proceso ya que [tienen] una perspectiva de intereses desde [su] función como docentes, la cual no puede quedar invisibilizada arbitrariamente”.*

Para decidir en tal sentido, considera la *a quo* que sin perjuicio “ *que el eventual éxito de la demanda no les implicará [a los docentes] la obligación de utilizar el llamado lenguaje inclusivo, pues –de acuerdo con el objeto de la litis- en caso de prosperar la demanda: 1) no nacería un deber en tal sentido y 2) en principio, el estado de cosas se retrotraería al momento anterior al dictado de la resolución cuya pérdida de validez se persigue* ”, correspondía tener presente la voluntad expresada y admitir su participación en los términos del artículo 84, inciso 1º, del CCAyT.

Ahora bien, conforme fuera desarrollado al inicio de este acápite, el supuesto de intervención voluntaria previsto en el artículo 84, inciso 1º, del CCAyT permite aceptar la participación de un tercero en el proceso sobre la base del interés que puede tener en la causa. Es decir que se considera tercero adherente quien, sin estar legitimado para demandar o para ser demandado, defiende un derecho ajeno (el del actor o el del demandado), pero en interés y en nombre propio.

En este sentido, se ha sostenido que si bien esta categoría de terceros no resultan perjudicados en forma directa por la sentencia que se pronuncie con relación a quienes son parte en el expediente, pueden sufrir consecuencias indirectas en virtud de la posición o de las relaciones jurídicas de las que son titulares (CSJN, *Fallos* : 326:1276).

El carácter que asume dicho tercero lo habilita a “ *suplir las omisiones en que incurre la parte coadyuvada. Puede, asimismo, oponerse a los actos de disposición del proceso que haga la parte a la que adhiere, por ejemplo, (...) desistimiento. Está legitimado para peticionar la caducidad de la instancia* ”. En suma, es sujeto del proceso, pero no de la pretensión deducida en él (cfr. Roland, Arazi, Rojas, Jorge, *Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y anotado*, Tomo I, Rubinzal Culzoni Editores, Buenos Aires, ps. 129 y ss.).

En cambio, el supuesto contemplado en el inciso 2º del artículo 84 del CCAyT da lugar al tercero a que asuma el carácter de parte, con las mismas atribuciones que actor y demandado tienen dentro del proceso.

Para participar dentro de un proceso bajo esa calidad de tercero, será



necesario justificar que se tiene un interés propio y presente en el pleito, siendo partícipe de la relación sustancial debatida en el proceso, por lo que la sentencia que se emita le afectará indefectiblemente.

A partir de las pautas desarrolladas, considero que, más allá del claro interés que pueden tener los recurrentes en la resolución del caso, en virtud del rol que detentan como docentes y directivos de escuelas de la Ciudad, dicha circunstancia no los ubica en la posición de parte. Máxime desde el criterio restrictivo con el que debe ser valorado este instituto.

Así lo pienso, puesto que, tal como dijo la *a quo*, y no fue rebatido por los apelantes, “ *la legitimación pasiva en este caso es ostentada exclusivamente por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, emisor de la norma impugnada. El GCBA es el único sujeto sobre el que podría recaer una sentencia de condena y que, consecuentemente, cuenta con la potestad de determinar de modo exclusivo y excluyente toda decisión de carácter procesal y de fondo que estime corresponder en lo que atañe a su posición en el litigio* ”.

Por tal motivo, opino que debería rechazarse el recurso de apelación interpuesto por los docentes y directivos y, en consecuencia, confirmar la resolución en lo que fue materia de agravio.

IV. En estos términos doy por contestada la vista conferida.



NIDIA KARINA CICERO  
FISCAL DE CAMARA  
kcicero@fiscalias.gob.ar  
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.  
21/12/2022 11:46:00